

# Acerca de los límites de los diálogos de La Habana: Entre acuerdos retóricos y cambios reales

**Santos Alonso Beltrán Beltrán**

Politólogo. Administrador Público  
Ingeniero Industrial. Magíster en Estudios Políticos  
Candidato a Doctor en Estudios Políticos  
y Relaciones Internacionales

La violencia que azota al país desde hace más de cincuenta años ha retrasado los cambios institucionales necesarios para resolver las fuertes tensiones sociales que se convirtieron –y aún se mantienen– como causas estructurales del conflicto armado. La violencia política que acompaña el desarrollo de este conflicto es solo la manifestación ulterior de la conflictividad que se origina en múltiples espacios de la vida social, económica y política de Colombia. Por ello, el conflicto, más que una simple confrontación armada, es una disputa económica, social y política que tiene como contendores al establecimiento y los sectores legales e ilegales de poder que lo acompañan, frente a los sectores dominados, organizados y no organizados, que se manifiestan constantemente contra la forma en que los sectores dominantes dirigen el país; entre los sectores en resistencia se encuentra la insurgencia armada.

La violencia armada desplegada en este conflicto es la consecuencia lógica de la existencia de un sistema político cerrado, intolerante frente a la disidencia política y anquilosado en la sucesión de castas políticas que administran el Estado desde inicios de la vida republicana. Por lo anterior, los diálogos de paz no pueden convertirse en el espacio para que el establecimiento se lleve una victoria gratuita mostrando una supuesta voluntad política para negociar aun con los sectores armados que pugnan por cambios en las instituciones y prácticas políticas del país, ni en una frustración para las clases y sectores de clase que históricamente han sido víctimas de la exclusión y el terrorismo de Estado a la hora

de ejercer sus derechos políticos. Y menos aún deben convertirse en la desmovilización simple de una estructura política que desde hace mucho tiempo ha estado ligada al devenir de los procesos organizativos y de resistencia política en las regiones.

### El proceso va bien, los cambios institucionales no

A todas luces, la terminación del conflicto político, económico, social y armado que azota al país sólo puede ser lograda mediante la transformación institucional de la organización del poder político en el país. Los diálogos deben conducir a cambios reales y concretos en múltiples facetas de la institucionalidad vigente. La negociación debe ser el contexto en el que se discutan temas tan complejos como el orden territorial del país, el modelo de representación política, la relación entre el poder civil y la fuerza pública, entre otros, cuya importancia muestra que la negociación no se desarrolla por la mera participación de FARC-EP en la vida política del país. Hasta ahora, los representantes del Gobierno en la mesa han insistido en que las negociaciones no deben tratar temas que deban desarrollarse por los canales institucionales del Estado y que requieran de procesos legislativos para ser resueltos; el gobierno ha insistido en que en La Habana no se negocia ni el modelo de Estado ni la estructura del poder ni el orden territorial; en ese sentido, y citando al propio *Marulanda*, los colombianos, la insurgencia incluida, deberíamos preguntarnos entonces *qué* se negocia en Cuba: ¿Sólo la desmovilización del movimiento guerrillero y su reinserción en el mundo político electoral? ¿Únicamente la participación de los posibles desmovilizados en los órganos de representación política y las estructuras partidarias que pueden formar para competir contra las maquinarias políticas de los partidos tradicionales? En verdad, si estos fueron los móviles de la negociación, no debería generarse entre la continuidad tal expectativa por un



"Segunda cara de su globalización".



Indignados de más de 80 países de los cinco continentes están llamados a salir este 15 de octubre para reclamar, a nivel internacional, "un cambio global" ante la situación económica, política y social actual.

proceso que conduciría a la reedición de los vicios del sistema político colombiano: la histórica persecución, hostigamiento y eliminación física, cuando no la cooptación, de las tercerías políticas, que en este caso se articularían alrededor del proyecto político defendido por la insurgencia.

Desde la guerrilla, la pugna ha estado centrada en ampliar la agenda y discutir los problemas que podríamos llamar temas estructurales para las solución política del conflicto. El inicio de los diálogos con la discusión sobre el problema de la tierra ha sido un acierto de la insurgencia, pero la incapacidad de convocar directamente a la mesa a los sectores institucionales y de poder que deciden en ello ha sido su derrota estratégica: ni el Ministerio de Agricultura ni los gremios relacionados con la explotación de la tierra se han sentido tocados por las conversaciones de La Habana y, por el contrario, se han opuesto abiertamente tanto a presentarse en la Mesa como a aportar

en realidad en las modificaciones tanto de política pública como del sentido de la producción y la propiedad en el país. Con ello los negociadores del gobierno pueden seguir asegurando que existen coincidencias muy importantes con las FARC-EP en el tema de tierras y que por ello el proceso va por buen camino, mientras que la insurgencia se queja de la poca disposición del Gobierno para concretar en términos de perspectiva de política pública los supuestos acuerdos. Al final, el Gobierno nacional puede seguir en su línea de desarrollo agrícola y presentarla como el triunfo de la posición institucional frente a las recomendaciones de la Mesa. Los acuerdos en este punto corren el peligro de volverse acuerdos retóricos y pueden ser utilizados únicamente como insumo para diagnosticar las diferencias entre los modelos de país, pero no van a servir como puerta de entrada a los cambios reales en la forma de ejercer el poder y de organizar con ello el Estado.




[http://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n\\_mundial\\_del\\_15\\_de\\_octubre\\_de\\_2011](http://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_mundial_del_15_de_octubre_de_2011)

### La participación popular: entre el molesto ruido y la marcha de apoyo

En el caso de la participación de la sociedad civil –una demanda que la insurgencia ha hecho pública en varias ocasiones–, la situación no es mas afortunada que en el punto anterior. Un proceso de paz no puede ser desarrollado como un diálogo cerrado entre la insurgencia armada y el establecimiento, sino que debe ser objeto de la reflexión, la opinión y la participación real de la más amplia gama de sectores sociales que puedan ayudar en la desactivación del conflicto social y en la definición de los cambios esenciales que demanda el ejercicio del poder y la estructura del Estado en el país. Sin embargo, el propio Gobierno nacional no ha escatimado esfuerzos para rechazar la participación de sectores y organizaciones de base de la sociedad civil, calificando su posible injerencia como un molesto ruido que –antes que construir– interrumpe el funcionamiento de una negociación rápida entre las partes. A tal punto ha llegado esta imagen del Gobierno nacional, que desde el inicio de los acercamientos entre las partes mantuvo cerrada herméticamente la Mesa y desarrolló en un secreto, cercano a la clandestinidad, los encuentros iniciales. Una vez empezaron los diálogos fue categórico en rechazar las iniciativas de participación de múltiples organizaciones de la sociedad civil para hacer parte de la Mesa de conversaciones.

La insurgencia por su parte ha insistido en la necesidad de ampliar la Mesa para que en ella tengan participación múltiples sectores de la sociedad civil organizada, especialmente aquellos sectores sociales que desde la resistencia política tienen visiones alternativas de múltiples temas de la vida nacional. Sin embargo, ni el esquema planteado ni la dinámica de acercamiento ha permitido que la demanda de la guerrilla se concrete. La solución alternativa, y tímida por demás, ha sido la realización de foros temáticos que desde Colombia aporten a la Mesa de negociaciones. Lamentablemente esta perspectiva de solución tiene



La movilización  
ciudadana no  
puede reducirse  
a una especie de  
sonido ambiental,  
a un coro o una  
arenaga al proceso;  
la movilización  
ciudadana es un  
reclamo para la  
ampliación de  
la Mesa, para la  
inclusión en ella  
de los sectores que  
pueden aportar  
desde su posición  
de dominados, y  
para discutir allí  
esos problemas  
que aquejan  
a la sociedad  
colombiana en  
su conjunto.

múltiples dificultades y falencias: no existe claridad sobre la forma en la que la Mesa pueda incorporar las recomendaciones de los foros en su relación con las dinámicas de acuerdos y en la exigibilidad de los mismos de cara a un proceso de cambio institucional; no hay tampoco claridad sobre la relación entre la política pública vigente, a todas luces contraria a las expectativas de sectores sociales en resistencia contra el modelo económico, político y social que desarrolla el actual gobierno, y las expectativas de cambio que emanan de los foros; de manera tal que, por ejemplo, en materia agraria, las conclusiones ni siquiera fueron motivo de discusión del Ministerio del ramo, que, antes que eso, las rechazó y las estigmatizó como producto del afán insurgente de fortalecerse en el campo colombiano, señalando con esto el trabajo campesino posterior a los diálogos; las conclusiones de los foros remitidas a la mesa y defendidas únicamente por la insurgencia terminan calificadas por la opinión nacional como propuestas de la guerrilla, con lo que estigmatizan las pretensiones del movimiento social desde la dinámica del terrorismo y el conflicto armado.

Últimamente se ha llamado a la participación en el proceso a partir del apoyo político que traduce la movilización ciudadana: la marcha multitudinaria por las principales ciudades del país. Sin desconocer la importancia que estas iniciativas tienen en la construcción de legitimidad para una apuesta tan ambiciosa como la paz negociada –que demanda toda la aceptación de los colombianos y en la que

la movilización ciudadana puede ser tanto un mensaje de unidad en torno a ella, como una exigencia del país en su conjunto frente a la continuidad del proceso–, es lamentable que esa sea la única posibilidad avalada por el establecimiento para la participación de la población y que esta iniciativa, esta manifestación de la voluntad popular que partió de los sectores populares para blindar el proceso de los reclamos de los militares y la derecha contraria a las expectativas de paz, pueda usarse con fines electorales en la reelección de un Gobierno que si bien ha emprendido de manera pragmática el proceso de reconciliación, no deja

de ser un proyecto neoliberal que excluye las mayorías sociales y los cambios que la ciudadanía exige. La movilización ciudadana por la paz debe convertirse en la demanda por la participación de los sectores sociales que han sido víctimas del modelo de desarrollo emprendido por la oligarquía nacional, el cual ha sido beneficioso únicamente para los dueños del capital nacional y extranjero, para las elites políticas y sus partidos tradicionales, para los grupos mafiosos enquistados en el Estado y para los ejércitos privados del capital ilegal, el paramilitarismo y sus secuelas armadas. La movilización ciudadana no puede reducirse a una especie de sonido ambiental, a un coro o una arenga al proceso; la movilización ciudadana es un reclamo para la ampliación de la Mesa, para la inclusión en ella de los sectores que pueden aportar desde su posición de dominados, y para discutir allí esos problemas que aquejan a la sociedad colombiana en su conjunto.

### El diálogo y la negociación: cerrar la brecha entre la retórica y la acción

La paz que se discute en La Habana es más que la simple rendición del movimiento armado, cuya incorporación a la política nacional en las condiciones actuales de desigualdad en la competencia política no haría otra cosa que repetir la historia de la exclusión y la persecución de la disidencia; por ello, no puede ser un diálogo cerrado entre las FARC-EP y los representantes del Gobierno nacional, sino un espacio de encuentro para reconstruir el poder, el Estado, el orden económico, la organización territorial, las relaciones internacionales, el papel de los militares en una sociedad en paz y



con graves problemas de desigualdad y vulnerabilidad social; en fin, discutir el modelo de Estado y de desarrollo. Pero la discusión no puede quedarse en la esfera nebulosa y gaseosa de las coincidencias retóricas de las partes, debe avanzar al desarrollo cierto de política pública, a cambios institucionales, a nuevas relaciones de poder. Si esto no se realiza, si no se tiene claro que las llaves de la paz no descansan en las manos de la insurgencia o del Gobierno sino del pueblo colombiano, la apuesta por la paz será otra vez una de las innumerables frustraciones de la sociedad colombiana. **IZO**